

memorial.

Diana Castaño <dianajuridica@gmail.com>

Jue 23/09/2021 11:18 AM

Para: Juzgado 04 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j04cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (221 KB)

39SentenciaAbreviadoPreacuerdo201589396Lpcchs (1).pdf;

Santiago de Cali, 23 de Septiembre de 2021.

--**Señor**

JUEZ CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI.

E. S. D.

REF: PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DTE: MARIA JULIANA ARIAS GÓMEZ Y OTROS

DDO: ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO Y OTROS

RAD. 2020 – 0027

DIANA CASTAÑO QUICENO, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.808.084 de Cali y tarjeta profesional No. 623.487 del C. S. de la J., obrando como apoderada de la parte actora, anexo al presente escrito sentencia de preacuerdo emitida por el juzgado 35 penal con funciones de conocimiento.

de antemano agradezco su atencion!

Diana Castaño Quiceno.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO TREINTA Y CINCO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO

SENTENCIA PREACUERDO No. 039
Primera Instancia-Procedimiento Penal Especial Abreviado
Radicación: 76 001 60 00196 2015 89396
Delito: LESIONES PERSONALES CULPOSAS
EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO
(Art 111, 112 INC 2, 113 INC 2, 114 INC 2, 117, 120, 31C.P.)
Acusado: ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO
Víctimas: MARIA JULIANA ARIAS GOMEZ Y
JUAN PABLO RESTREPO AYALA

Santiago de Cali, Valle del Cauca, ocho (08) de junio de dos mil veintiuno (2021)

I. MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO

Verificada y aprobada la aceptación de responsabilidad efectuada por parte del imputado ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO, a través de preacuerdo, donde aceptó el cargo por el delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO, consagrado en el artículo 111, 112 INC 2, 113 INC 2, 114 INC 2, 117, 120 y artículo 31 del C.P., y escuchadas las argumentaciones de las partes sobre las particularidades del procesado, la pena a imponer y los sustitutos penales, sin que se evidencie causal alguna de nulidad de lo actuado, procede el despacho a emitir el fallo en primera instancia que en derecho corresponde:

II. INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN
DEL ACUSADO

ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía número 7.544.336¹ de Armenia, Quindío, nació el 01 de julio de 1964, cuenta con 56 años de edad, hijo de Romelia Agudelo y Roso de Jesús Pérez, estado civil soltero, estudió la primaria, de ocupación conductor, residente para la época de los hechos en la calle 17 No. 29A-154, Cali, celular 313 625 14 75, 311 729 67 58.

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

El 26 de diciembre de 2015, siendo las 20:30 horas aproximadamente, a la altura de la calle 1 con carrera 64 A, de esta ciudad, se presentó un accidente de tránsito, cuando el señor ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO conducía el vehículo, publico - taxi, modelo 2019, HYUNDAI, de placas VCZ572 de Cali, el cual transitaba en la calle 1 sentido norte sur, al realizar maniobra de

¹ Resultado de cotejo de dactiloscopia.

giró a la izquierda, en dirección a la carrera 64 A, sin respetar la prelación vial, en momentos en que por la misma vía, pero en sentido contrario transita el señor JUAN PABLO RESTREPO AYALA quien conducía la motocicleta, color negra, de placas FTI74C de Cali, llevaba como parrillera a la señora MARIA JULIANA ARIAS GOMEZ, quienes traían prelación sobre la vía cuando son colisionados por el taxi, lo que ocasiona que esta y sus ocupantes caigan, causando con el impacto lesiones personales a los mismos.

Una vez las víctimas fueron valoradas por medicina legal, les dictaminó, al señor JUAN PABLO RESTREPO AYALA incapacidad definitiva de 60 días, y secuelas médico legales: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; y a la señora MARIA JULIANA ARIAS GOMEZ, incapacidad definitiva de 55 días, y secuelas médico legales: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del órgano del sistema nervioso periférico de carácter permanente, perturbación funcional del órgano del sistema de la gestación de carácter permanente.

IV. ACTUACIÓN PROCESAL

El día 10 de abril de 2019, la Fiscalía corrió traslado del escrito de acusación, en contra de ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO, acusándolo por el delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN CONCURSO HOMOGNEO Y SUCESIVO, consagrado en el art 111, 112 INC 2, 113 INC 2, 114 INC 2, 117, 120 y artículo 31 del C.P., en calidad de autor, cargo que fue no aceptado por el imputado.

El 19 de abril de 2019, la Fiscalía, presentó escrito de acusación, asignado por reparto a este Despacho el 29 de abril de 2019, fijando el 19 de junio de 2019 para audiencia concentrada, reprogramada para el 2 de septiembre, 23 de octubre de 2019, 7 de febrero, 24 de abril, 14 de octubre, 21 de diciembre de 2020, 27 de enero, 22 de febrero y 07 de mayo de 2021 en esta última, finalmente se varió el objeto de la diligencia y la fiscalía verbalizó el preacuerdo, al cual llegó con el imputado asistido por su defensor, acuerdo conforme a lo establecido en los artículos 348, 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal, el cual consiste en que el señor ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO acepta su responsabilidad por el delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN CONCURSO HOMOGNEO Y SUCESIVO, consagrado en el art 111, 112 INC 2, 113 INC 2, 114 INC 2, 117, 120 y artículo 31 del C.P., pactando la pena a imponer de DIEZ (10) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS DE PRISIÓN, multa de 10.4 SMLMV y pena de prohibición del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas de 17 meses, y como único beneficio, le ofreció la suspensión condicional de la ejecución del artículo 63 del C.P. respecto a la pena de privación de conducir vehículos automotores contemplado en el art 120 inc 2 del C.P.. frente al preacuerdo la Apoderada de la víctima no presentó observaciones y no se opone al mismo. Fue necesario la suspensión de la diligencia, fijando el 1 de junio de 2021 para su continuación.

Una vez verificado los derechos del Imputado, de cada uno de los puntos preacordados y de los elementos materiales probatorios, no encontrando quebrantamiento del principio de legalidad que impera en el proceso penal, por lo cual corroboró con el imputado su manifestación de aceptación de responsabilidad, libre, consciente y voluntaria, sin encontrar vicios de consentimiento y conciencia plena de las consecuencias jurídicas de su manifestación de culpabilidad, preacuerdo frente al cual la Apoderada de la víctima, manifestó no oponerse al mismo, por lo que fue aprobado el preacuerdo en su integridad por el Despacho sin que de ninguna manera hubiera acreditado la vulneración de garantías fundamentales, y se anunció, que el fallo que habría de proferirse sería condenatorio.

En el traslado del artículo 447 del C. de P. Penal, la Fiscalía General de la Nación a través de su Delegada, se refirió a las condiciones físicas, civiles, personales, sociales y familiares del acusado, persona que se encuentra plenamente identificada y carece de antecedentes penales,

pide se imponga la pena pactada en el preacuerdo y se conceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena por cumplirse los requisitos del artículo 63 del C.P.

La Apoderada de la víctima, hace referencia a la sentencia SU 479 de 2019, reconoce que se le puso en conocimiento el preacuerdo en la anterior audiencia, que, si bien la reparación integral es después del fallo, deja constancia que ha presentado solicitud de reclamación a la aseguradora siendo negada.

La Defensa, se atiene a lo manifestado por la Fiscalía, insiste en que su Representado tiene arraigo, carece de antecedentes, pide se le conceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por cumplirse los requisitos objetivos y subjetivos del artículo 63 del C.P. y en ese caso no existe necesidad de la ejecución de la pena, tal como se pactó en el preacuerdo.

Para el traslado de la sentencia, conforme el artículo 545 del C.P.P. se fijó el día 8 de junio de 2021, a las 15: 30 horas.

V. CONSIDERACIONES

Tal como lo prevé el artículo 348 inc. 1º del C.P.P., la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación anticipada del proceso. Ello, con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso. Las reglas específicas sobre el trámite a seguir en eventos de preacuerdos y negociaciones se hallan consagradas, en lo fundamental, en los arts. 349 al 354 ídem.

Para que tal sentencia sea condenatoria, el juez debe tener conocimiento de la ocurrencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, (Art. 381 CPP) y para el caso de la aceptación de cargos mediante allanamiento o preacuerdo, debe existir además de esta, un respaldo suficiente a partir de los elementos de convicción del que se pueda predicar la autoría o participación en la conducta y su tipicidad, pues sin tal respaldo probatorio, así se presentase allanamiento o preacuerdo, el mismo no procedería por no existir compromiso frente a la presunción de inocencia.

Así entonces, la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado en este caso se demuestran a través de los siguientes elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida:

Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A 00321534 del 26 de diciembre de 2015, con anexo croquis, bosquejo topográfico.

Formato inspección vehículo FPJ 22.

Informe Investigador de Campo FPJ 11. con álbum fotográfico.

Acta de consentimiento FPJ 28.

Acta de inspección a lugares FPJ 9.

Querella instaurada por las Víctimas.

Constancia de no acuerdo conciliatorio.

Actuación primer respondiente FPJ 4.

Entrevista a agente de tránsito en formato FPJ 14, recibidas el 6 de diciembre de 2016.

Entrevista a las víctimas en formato FPJ 14, recibidas el 5 de junio de 2018.

Oficio del 29 de noviembre de 2016, en el que Instituto Nacional de Medicina Legal, en el que se abstiene de realizar nuevo reconocimiento médico legal, toda vez que reporta información que el cuarto informe Pericial de Clínica Forense practicado al señor JUAN PABLO RESTREPO AYALA, en el último en el acápite de análisis, interpretación y conclusiones se consigna: "Mecanismo traumático de lesión: corto contundente, abrasivo. Incapacidad médico legal definitiva de 60 días, y secuelas medicolegales: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente". Igualmente se aporta el primer y segundo reconocimiento médico legal.

Informe Pericial de Clínica Forense del 18 de noviembre de 2016, practicado a la joven MARIA JULIANA ARIAS GOMEZ, en el último en el acápite de análisis, interpretación y conclusiones se consigna: "Mecanismo traumático de lesión: Abrasivo, contundente. Incapacidad médico legal definitiva de 55 días, secuelas médico legales: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del órgano del sistema nervioso periférico de carácter permanente, perturbación funcional del órgano del sistema de la gestación de carácter permanente.

Formato Arraigo FPJ 34.

Informe de laboratorio FPJ 13-Informe de lofoscopia de plena identidad.

De estos elementos se determina la materialización de la conducta punible y la responsabilidad del enjuiciado, en especial de la denuncia de la señora MARIA JULIANA ARIAS GOMEZ y el señor JUAN PABLO RESTREPO AYALA, quienes relataron de forma coincidente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos, en los cuales resultaron lesionados cuando se desplazaban en una motocicleta y fueron colisionados por un vehículo, público, tipo taxi, conducido por el señor ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO, quien con violación al deber objetivo de cuidado, al realizar giro, no respetó la prelación sobre la vía del motociclista y su acompañante, situación de la cual también dan cuenta el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A 00321534 del 26 de diciembre de 2015, con anexo croquis o bosquejo topográfico, en el que se evidencia la trayectoria, ubicación y posición final de los vehículos involucrados.

Los elementos materiales probatorios antes mencionados, suplen el supuesto probatorio mínimo para inferir la tipicidad de la conducta y la autoría del procesado; de allí se determinan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la conducta delictiva aunado a la aceptación de responsabilidad, donde no sólo se debe tener en cuenta la aceptación preacordada del cargo, sino también el señalamiento realizado por las víctimas, las lesiones sufridas y la incapacidad dictaminada por medicina legal, la cual arrojó, al señor JUAN PABLO RESTREPO AYALA, una incapacidad definitiva de 60, y secuelas médico legales: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, y para la señora MARIA JULIANA ARIAS GOMEZ, una incapacidad definitiva de 55, y secuelas médico legales: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del órgano del sistema nervioso periférico de carácter permanente, perturbación funcional del órgano del sistema de la gestación de carácter permanente, dando credibilidad más allá de toda duda razonable de la comisión de la conducta, al tenor del artículo 381 del C.P.P.

Fácil es entonces concluir, que en el presente evento se tienen que las exigencias contenidas en el artículo 9 del estatuto punitivo se encuentran satisfechas, como quiera que la conducta de ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO, se encuentra descrita en el artículo 111, 112 INC 2, 113 INC 2, 114 INC 2, 117, 120 y artículo 31 del C.P., Así mismo, es antijurídica como quiera que se lesionara sin justa causa el ordenamiento jurídico tutelado por el legislador, como lo es, la integridad personal de los ofendidos.

La conducta desplegada por el señor ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO cometida en la modalidad culposa, al violar el deber objetivo de cuidado que comporta la actividad de conducción de vehículos, infringiendo las normas de tránsito al no respetar las señales de tránsito, realizar una maniobra peligrosa sin tener en cuenta la prelación que traían sobre la vía el motociclista y su acompañante continuando la marcha de manera imprudente, siendo esta la causa eficiente del

resultado. No se observa en los hechos materia de juzgamiento causal excluyente de responsabilidad de las consagradas en el artículo 32 del Código Penal, el autor era conocedor del carácter ilícito de su comportamiento al causar lesiones en la integridad personal de la víctima; quedando satisfecha la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado, permite emitir un juicio de reproche.

Por las anteriores consideraciones, se reúnen a criterio de este Despacho, los condicionamientos para proferir sentencia condenatoria conforme a los cargos formulados y aceptados vía preacuerdo.

VI. DE LA PENA A IMPONER Y SU INDIVIDUALIZACIÓN

La conducta preacordada por la fiscalía, frente a la que se profiere la presente sentencia es la descrita en el Código Penal Ley 599 de 2000, Libro II, Título I Delitos Contra la vida y la integridad personal, Capítulo tercero de las LESIONES PERSONALES, cuya conducta básica y verbo rector se encuentran descritos en el Artículo 111, en concordancia con el artículo 112 inciso segundo: “causar daño en el cuerpo o en la salud” si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a 30 días sin exceder de 90 días la pena será de prisión de dieciséis (16) meses a cincuenta (54) meses, y multa de 5 a 10 SMLMV, dado que la incapacidad en este caso lo fue de 55 y 60 días definitivos, respectivamente para cada una de las víctimas, Artículo 113 inc 2 “Si el daño consistiere en deformidad física ... permanente, la pena será de prisión de treinta y dos (32) a ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, toda vez que ambas víctimas presentan deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, y Artículo 114 inc 2 del C.P. “Si el daño consistiere en perturbación funcional... permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, por presentar una de las víctimas, secuela de perturbación funcional del órgano del sistema nervioso periférico de carácter permanente, perturbación funcional del órgano del sistema de la gestación de carácter permanente; se impondrá esta última por ser la pena correspondiente a la de mayor gravedad, tal como lo dispone el artículo 117 del C.P.

Conducta cometida en concurso homogéneo, por lo que podrá ser aumentado hasta en otro tanto de conformidad con el artículo 31 C.P. por tratarse de un concurso de conductas punibles, pues el acusado violó varias veces la misma disposición legal, al tratarse aquí de dos víctimas.

Conducta cometida en la modalidad CULPOSA, “El que por culpa cause a otro alguna de las lesiones a que se refieren los artículos anteriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes” lo que arroja un nuevo marco punitivo que va de NUEVE (9) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS DE PRISIÓN a TREINTA Y SEIS (36) meses de prisión, y multa equivalente a 6.9 a 13.5 SMLMV

El inciso segundo del artículo 120 del Código Penal consagra que: “cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas...” de 16 a 54 meses.

De conformidad con lo establecido en el inciso 5 del artículo 61 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004 en su artículo 3, no se realizará el procedimiento de los cuartos, toda vez que en el acuerdo, aprobado en su integridad por el Despacho, se estableció que la pena a imponer sería el mínimo, aumentada conforme el artículo 31 del C.P., por lo tanto la pena definitiva será de DIEZ (10) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS DE PRISIÓN, multa equivalente a diez punto cuatro (10.4) SMLM vigentes al año 2015, suma que deberá cancelar a favor del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la presente

decisión, y la pena de la PRIVACIÓN DEL DERECHO DE CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS de DIECISIETE (17) MESES, término que envuelve la drasticidad suficiente, ponderando la gravedad de la conducta, el daño real causado, y habida cuenta de la necesidad de retribución que con la pena se busca y la prevención especial que ella debe comportar.

En concordancia con el artículo 52 del Código Penal, se impondrá como pena accesoria, la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena privativa de la libertad.

VII. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.

Tenemos que, si bien es cierto, la acción penal tiene como objetivo primordial sancionar a quienes con su actuar violan intereses jurídicos individuales o colectivos mediante el delito, también lo es que dicho comportamiento delictuoso produce efectos jurídicos dañinos, que da lugar a la acción civil para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con esa conducta delictiva, naciendo así la obligación para el sujeto activo de reparar los daños tanto morales como materiales.

Entre los múltiples derechos que tienen las víctimas, está no sólo el que se haga justicia en el caso concreto, sino también a la reparación del daño causado a través de una compensación económica, por eso las víctimas disponen de un término de treinta (30) días, una vez quede en firme esta sentencia para que si lo desea soliciten inicien incidente de reparación integral, como lo prevé el art. 89 de la Ley 1395 de 2010.

VIII. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

El artículo 63 del Código Penal, fue modificado por el Art. 29 de la ley 1709 de 2014, permite suspender condicionalmente la ejecución de la pena, siempre que concurran los requisitos allí previstos.

En punto al beneficio de la suspensión condicional de la prohibición de conducir vehículos automotores y motocicletas, que la fiscalía reconoció a través del preacuerdo, se debe tener en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia, en torno a la posibilidad de pactar la forma de cumplimiento de la pena, en la Sentencia SP16907-2016, Radicación N° 46684 del 23 de noviembre de 2016, precisó:

...En los casos en que los subrogado o sustitutos penales estén prohibidos por la Ley, tales mecanismos no pueden ser autorizados por el preacuerdo.

De no estar excluido los sustitutos o subrogados, se rigen por los requisitos relacionados con factores objetivos y subjetivos, éstos últimos se apreciarán conforme a lo demostrado en el proceso y los primeros (los factores objetivos) dependen del marco de punibilidad aplicado para individualizar la pena en el caso concreto y la sanción impuesta, siendo entonces estos criterios los que han de tenerse en cuenta para conceder o negar el sustituto penal.

Los supuestos para la definición de los subrogados, cuando no se trata de exclusiones o prohibiciones, se circunscribe no a la responsabilidad declarada sino sobre la pena impuesta y el marco de punibilidad de donde se deriva ésta, de ahí depende normativamente el requisito objetivo de aquellos, el marco de punibilidad no es el del tipo

penal que se tuvo en cuenta para definir la responsabilidad sino el que resulta de la punibilidad negociada para el caso concreto y la sanción impuesta.

Con los preacuerdos se puede negociar la pena y su ejecución, excepto cuando el legislador lo haya prohibido expresamente.

Se verifica aquí el cumplimiento del requisito objetivo de que trata el artículo 63 C.P.; esto es, la pena a imponer no supera los cuatro años de prisión, el sentenciado carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso 2 del artículo 68 A del Código punitivo, lo que obliga a conceder el subrogado con base solamente el requisito objetivo la norma en comento, aunado a lo anterior se observa que tiene arraigo, no se le imputaron circunstancias de mayor punibilidad, así las cosas, se concederá a ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO la suspensión condicional de la ejecución de las penas principales de prisión, multa y de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas², por un periodo de prueba de TRES (3) AÑOS, debiendo para ello prestar caución por valor de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000), y suscribir diligencia de compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 65 del Código Penal; se le advierte que el incumplimiento de las obligaciones impuestas, hará que se le revoque el beneficio y se haga efectiva la pena, al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 C.P.

En firme esta determinación se dará la publicidad de ley - artículo 166 del C.P.P. y se remitirá la carpeta con los audios respectivos, a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad @ Santiago de Cali, para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TREINTA Y CINCO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE.-

PRIMERO: Declarar como autor penalmente responsable a ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO, plenamente identificado e individualizado, del delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO, consagrado en el art 111, 112 INC 2, 113 INC 2, 114 INC 2, 117, 120 y artículo 31 del C.P., del que fueron víctimas la señora MARIA JULIANA ARIAS GOMEZ y el señor JUAN PABLO RESTREPO AYALA; en circunstancias de tiempo, modo y lugar ya referidos.

SEGUNDO: CONDENAR a ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO a la pena principal de DIEZ (10) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS DE PRISIÓN y MULTA equivalente a diez punto cuatro (10.4) SMLMV vigentes, y la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas de DIECISIETE (17) MESES, como pena accesoria se impone la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena de prisión.

TERCERO: CONCEDER a ARLEY ENRIQUE PEREZ AGUDELO, la suspensión condicional de la ejecución de las penas principales de prisión, multa y de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas, por un periodo de prueba de TRES (3) años, debiendo, prestar caución prendaria por valor de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000), consignación que

² La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en decisión SP3366-2018, Radicación N°. 50961 del 15 de agosto de 2018, M.P. EYDER PATIÑO CABRERA.

deberá efectuar a nombre del Centro de Servicios Judiciales, y suscribir diligencia de compromiso, obligándose a cumplir los cometidos establecidos en el artículo 65 del Código Penal; se le advierte que el incumplimiento de las obligaciones, dará lugar a que se le revoque el beneficio y se haga efectiva la pena, al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 ídem.

CUARTO: Las víctimas, disponen de un término de treinta (30) días, una vez quede en firme esta sentencia para que si lo desea solicite se inicie incidente de reparación integral.

QUINTO: Ejecutoriada la presente decisión se dará la publicidad que la ley establece, artículo 166 del C. de P. Penal. y se remitirá el cuaderno a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad para lo de su competencia, lo anterior a través del Centro de Servicios de los Juzgados Penales de esta ciudad.

SEXTO: Contra esta sentencia procede el recurso de apelación, ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de este Distrito Judicial, el cual deberá interponerse de conformidad con lo normado en el artículo 545 C.P.P. una vez notificada las partes cuentas con cinco (5) días para la presentación y sustentación del recurso de apelación, ocurrido esto se correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cinco (5) días conforme lo establece el artículo 179 CPP.

De conformidad con lo normado en el artículo 139 numeral 6 del C.P.P. se deja expresa constancia que en el trámite de estas diligencias se ha cumplido con todas las normas referentes a la preservación de los derechos del imputado y de las víctimas.

Firmado Por:

**SANDRA HIDALY LEIVA PEMBERTHY
JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 035 MUNICIPAL PENAL DE CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DE CALI-
VALLE DEL CAUCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

f03984bf1e4b72f60d603556c55ca9c76a10fd918ccfe0d617cc1b8a22954a9c

Documento generado en 08/06/2021 03:44:56 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>